



Roj: **SAN 1134/2024 - ECLI:ES:AN:2024:1134**

Id Cendoj: **28079230052024100140**

Órgano: **Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **5**

Fecha: **13/03/2024**

Nº de Recurso: **2820/2021**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **EDUARDO HINOJOSA MARTINEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## **AUDIENCIA NACIONAL**

**Sala de lo Contencioso-Administrativo**

### **SECCIÓN QUINTA**

**Núm. de Recurso:** 0002820 /2021

**Tipo de Recurso:** PROCEDIMIENTO ORDINARIO

**Núm. Registro General:** 21795/2021

**Demandante:** D. Domingo

**Procurador:** SRA. AFONSO RODRÍGUEZ, ISABEL

**Demandado:** MINISTERIO DE INTERIOR

**Abogado Del Estado**

**Ponente Ilmo. Sr.: D. EDUARDO HINOJOSA MARTINEZ**

### **SENTENCIA Nº :**

**Ilmo. Sr. Presidente:**

D. JOSÉ LUIS GIL IBÁÑEZ

**Ilmos. Sres. Magistrados:**

D<sup>a</sup>. MARGARITA PAZOS PITA

D<sup>a</sup>. FATIMA BLANCA DE LA CRUZ MERA

D. EDUARDO HINOJOSA MARTINEZ

Madrid, a trece de marzo de dos mil veinticuatro.

Esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el recurso contencioso-administrativo número 2820/2021, promovido por **D. Domingo**, representado por la Procuradora de los Tribunales D.<sup>a</sup> Isabel Afonso Rodríguez, y asistido por el Letrado D. Benet Salellas Vilar, en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida al Ministerio del Interior, habiendo sido parte demandada la Administración del Estado, representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado.

Es ponente el Ilmo. Sr. **D. Eduardo Hinojosa Martínez**, Magistrado de la Sección.

### **AN TECEDENTES DE HECHO**

**PR IMERO.-** Procedimiento administrativo previo

Con fecha de 3 de febrero de 2021, el Sr. Domingo presentó reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración del Estado, Ministerio del Interior, por los daños causados durante los incidentes acaecidos en la ciudad de Barcelona el día 18 de octubre de 2019, cuando, según afirmaba, fue alcanzado por una pelota de goma disparada por algún miembro del Cuerpo Nacional de Policía.

La reclamación no fue resuelta en el plazo de seis meses establecido para ello, entendiéndose así contestada en sentido desfavorable.

**SE GUNDO.-** Interposición del recurso, demanda y contestación

Interpuesto en relación con la falta de respuesta administrativa, acordándose su ampliación a la resolución de 25 de enero de 2022 de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, actuando por delegación del Ministro, que desestimó expresamente la reclamación, una vez turnado a esta Sección, el presente recurso contencioso-administrativo fue admitido a trámite con reclamación del expediente administrativo, del que, una vez recibido, se dio traslado a la parte actora con su emplazamiento para formalizar la demanda, lo que así hizo su representación mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando a la Sala que "...dicte Sentencia por la que estime la presente demanda, anulando la resolución que se recurre, y reconociendo el derecho del reclamante a la indemnización interesada que asciende a la suma de cifra de trescientos doce mil setecientos setenta y cuatro euros (312.774,34 €), junto los intereses legales pertinentes desde la fecha de interposición de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por quien suscribe..".

Tras su debido emplazamiento, el Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, pidió a la Sala que se dicte "...sentencia por la que se desestime el presente recurso, confirmando íntegramente la resolución impugnada por ser conforme a Derecho, con imposición de costas a la parte recurrente..".

**TE RCERO.-** Prueba y terminación

Acordado el recibimiento a prueba y la admisión de la documental propuesta, teniéndose por reproducidos los documentos acompañados a la demanda, tras la presentación por las partes de sus conclusiones escritas, quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 12 de marzo de 2024.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Sobre la reclamación previa presentada

La resolución de 25 de enero de 2022 de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, actuando por delegación del Ministro, frente a la que, tras su ampliación, se dirigió el presente recurso, desestimó expresamente la reclamación presentada por el actor el día 3 de febrero de 2021 de reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración del Estado, por los daños causados durante los incidentes acaecidos en la ciudad de Barcelona el día 18 de octubre de 2019, cuando, según aquel afirma, fue alcanzado en el ojo izquierdo por una pelota de goma disparada por algún miembro del Cuerpo Nacional de Policía cuando se encontraba de regreso a su domicilio junto con su pareja, en la confluencia de la Ronda de Sant Pere con la calle Pau Claris, sufriendo por ello daños que tasa en la cantidad total de 312.774,34 euros, más los intereses legales devengados desde la presentación de la reclamación administrativa.

Los anteriores hechos dieron lugar a la formulación de la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Guardia y al seguimiento ante el de Instrucción número 27 de Barcelona de las Diligencias Indeterminadas 834/2019, sobreseídas provisionalmente por medio de Auto de 22 de octubre de 2020, por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa.

Finalizado el mencionado proceso penal, el recurrente presentó su reclamación previa, que al tiempo de interponerse el presente recurso contencioso-administrativo, aún no había recibido respuesta expresa, lo que tuvo lugar por la mencionada resolución, que en línea con el silencio mostrado inicialmente, rechazó íntegramente lo pedido en sede administrativa.

**SEGUNDO.-** Las cuestiones planteadas por las partes

Reiterando los términos de su reclamación, el actor afirma en su demanda que alrededor de las 21:00 horas del día 18 de octubre de 2019, se encontraba con su pareja en el cruce de la calle Pau Claris y la Ronda de Sant Pere de Barcelona con la voluntad de regresar a su domicilio, cuando tras rebotar contra el suelo recibió el impacto de una pelota esférica de caucho de 54 milímetros, procedente de la actuación llevada a cabo por miembros del Cuerpo Nacional de Policía con ocasión de los incidentes de orden público acaecidos en ese

momento, procedencia esta que la demanda considera acreditada al constar que los Mossos d'Esquadra no intervinieron en los hechos, teniendo además prohibido el uso de dicho material, y por quedar justificado, por el contrario, que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía sí hicieron uso entonces de tales pelotas.

Considera el recurrente que las fuerzas del orden no respetaron los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, en el ejercicio de su actuación profesional, sino que la desarrollaron de forma abusiva y contraria a la diligencia exigida por la ley, concurriendo así los requisitos legalmente establecidos para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, concretamente, la relación causal necesaria entre el daño producido, la pérdida de visión en un ojo, y la actuación de aquella, relación que, según se dice, quedaba justificada mediante informe médico forense emitido en las actuaciones penales seguidas, acompañado a la reclamación.

Concurriría también en el caso el requisito de la antijuridicidad del daño, para lo que la demanda acude a la lejanía del lugar donde se desarrollaron los incidentes en los que intervino la Policía Nacional, en el número 43 de la Vía Layetana, respecto de aquel en el que se produjo el daño, la confluencia entre las calles Pau Claris y "...Diputació..." (sic), según se dice, separados por un kilómetro de distancia. Se objeta también en este sentido la utilización de material cuyo uso había sido prohibido por el Parlamento de la Comunidad Autónoma cinco años antes.

La demanda se ocupa asimismo de describir el daño efectivo causado, con especial referencia para ello al citado informe forense.

Tras mencionar el conjunto de presupuestos que conforman el modelo de responsabilidad patrimonial vigente en nuestro país, el Sr. Abogado del Estado entiende que el actor no habría probado la mencionada relación causal, pudiendo haber procedido el daño de la Policía autonómica o de otras causas, rechazando asimismo la justificación de la antijuridicidad de la lesión, dada la especial gravedad de las alteraciones del orden público que la Policía Nacional acudió a sofocar en el lugar en el que habría sucedido el evento dañoso y en el que se encontraba el recurrente, que, por lo tanto, habría asumido voluntariamente el riesgo padecido.

En cualquier caso, la contestación a la demanda considera asimismo carente de prueba el importe asignado a la indemnización reclamada.

#### **TE RCERO.-** Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración

Como es obligado, la resolución de tales cuestiones debe sustentarse en las previsiones de la propia Constitución española ( artículo 106.2) y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículos 32 y siguientes), sobre el reconocimiento en favor de los ciudadanos del derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, y ello con un sistema de responsabilidad basado en la lesión patrimonial, equivalente a daño o perjuicio, en la doble modalidad de daño emergente o lucro cesante, que ha de ser real, concreta, susceptible de evaluación económica e ilegítima o antijurídica, es decir que el particular no tenga el deber de soportar, precisándose asimismo la existencia de un nexo causal adecuado entre la acción u omisión administrativa y el resultado lesivo, así como, finalmente, la ausencia de fuerza mayor.

En supuestos como el que ahora se examina cobra especial interés el elemento de la antijuridicidad del daño, cuya concurrencia debe dilucidarse a la vista de las determinaciones contenidas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y del establecimiento en ella como principio básico de actuación de tales de los miembros de tales Fuerzas y Cuerpos, de la utilización de armas solo "...en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior..." [artículo 5.2.d)], es decir los "...de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance..." [artículo 5.2.d)].

En efecto, como declaró el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de junio de 2005 (casación 6322/2000), en estos casos "...la cuestión clave a juicio de la Sala consiste en determinar si se cumplieron esos principios básicos de actuación, o, si lejos de ello, se excedieron y conculcaron, careciendo la intervención en consecuencia de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

Los términos que utiliza el legislador en el artº 5 citado vienen a requerir una actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que en cada ocasión guarde el debido equilibrio entre el fin que pretenda obtener y los medios a su alcance que haya de utilizar. No pueden entenderse de otro modo esas expresiones que usa la Ley. Una actuación es congruente, es decir, posee congruencia, cuando establece una relación lógica entre dos acciones y por ello resulta conveniente y oportuna, y algo es oportuno cuando es adecuado y conveniente porque produce un buen efecto, y goza por ese hecho de la cualidad de oportuno, y, a su vez, la proporcionalidad

o lo proporcionado no significa otra cosa sino que lo que se hace o la acción que se produce guarda en sus dimensiones armonía o conveniencia con el resultado que se pretende obtener.

Esos principios de actuación se vinculan y relacionan con otro de los mandatos que impone el art. 5 de la Ley Orgánica 2/1986 a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el uso que legítimamente han de hacer de las armas que el Estado les confía. Y así, hemos de recordar como el apartado d) del núm. 2 del artículo citado dispone que: "solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior".

De lo que afirma el precepto resulta evidente que el uso de las armas constituye en una actuación en la que intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una última opción, sólo admisible cuando concurra alguna de las situaciones que el artículo describe como riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que supongan un grave riesgo para la seguridad ciudadana y siempre adecuando su uso o utilización a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad entendidos del modo expuesto.

Además, y en relación con el supuesto concreto, también es preciso referirse al modo en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben realizar las actuaciones en las que se vaya a detener a un ciudadano, de acuerdo con lo que dispone el art. 5, núm. 3, apartados a) y b) de la Ley Orgánica 2/1986. Los requisitos que la Ley prevé son como ya dijimos la debida identificación de los funcionarios y la obligación de velar por la vida e integridad física de las personas que detuvieren, y, también, en este supuesto, la actuación debe regirse por los principios básicos ya mencionados de congruencia, oportunidad y proporcionalidad..".

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, completa esos principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con los rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, estableciendo concretamente que las autoridades a las que se refiere "...adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana..", y que "...las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas a las circunstancias.." (artículo 23.1 y 2).

Para la correcta resolución del asunto conviene también tener en cuenta la prevalencia de los órganos del orden penal en la fijación de los hechos respecto de los de otros órdenes jurisdiccionales, ya que, como afirmó la STC 77/1983, "...es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado.." (también SSTC 24/1984 o 172/2016, entre otras), lo que, según establece hoy la Ley 40/2015, hace obligada la suspensión de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan cuando "...la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.." ( artículo 37.2), particularización todo ello de las previsiones generales contenidas sobre ello en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ( artículo 10.2) y en la Ley Jurisdiccional (artículo 4.1).

**CUARTO.-** Sobre la concurrencia en el caso de la relación causal entre el daño y la actuación de la demandada

Según lo dicho, las partes discrepan ante todo sobre la concurrencia en el caso de la relación causal de la actuación de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía con el evento dañoso producido, la lesión ocular sufrida por el recurrente, extremo este cuya realidad, asumiendo para ello las objeciones expuestas en la resolución recurrida y en la contestación a la demanda, la Sala no puede dar por debidamente acreditada.

Ciertamente, como puede verse en el informe emitido el 11 de mayo de 2021 por el Jefe Superior de Policía de Cataluña, el día de los hechos, el 18 de octubre de 2019, los Agentes del Cuerpo Nacional de Policía hicieron uso de material antidisturbios del tipo mencionado por el recurrente, aunque al mismo tiempo el informe afirmaba que no existía constancia de las lesiones causadas a aquel y sí, por el contrario, del despliegue en la misma zona del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, "...que, inevitablemente, también hizo uso de material antidisturbios..".

Consta también por informe de 20 de septiembre de 2020, de la Comisaría General de Recursos Operativos de los Mossos d'Esquadra, que los manifestantes se concentraron en la Plaza Urquinaona, y que debido a la violencia contundente empleada, con grandes piedras, pirotecnia, palos y diferentes objetos de grandes dimensiones que lanzaban, diversos vehículos policiales de los Mossos trataron de acceder a la Plaza desde la calle Trafalgar pero no consiguieron desplegarse en el lugar debido a la intensa violencia desplegada contra ellos, debiendo volver hacia la citada calle, sin realizar intervención alguna a pie de tierra en la plaza.

El informe concluye en que no se produjo ninguna intervención policial, mas ello con específica referencia a la confluencia de la Vía Laietana con la Plaza Urquinaona, sin que nada se dijera de manera expresa sobre

su actuación en el resto de la plaza ni sobre el uso por el Cuerpo policía autonómico, en una u otra forma, de material antidisturbios.

Sobre este particular extremo, la demanda menciona también la resolución del Parlamento de Cataluña 476/X, que, según dice, tenía prohibido desde 2014 el uso de balas de goma, lo que indicaría que su utilización en los hechos no habría podido proceder de la Policía autonómica, sino del Cuerpo Nacional de Policía, aunque lo cierto es que dicha resolución autorizaba el empleo de tales elementos como "...último recurso (...) en situaciones graves de ejercicio de la violencia o en que exista un riesgo inminente para la integridad física o la vida de los ciudadanos y de los agentes de policía o si se produce una importante destrucción de bienes.." (apartado 27), situación que, por lo que ya se ha dicho y se dirá más adelante, no puede descartarse que se presentara en esa ocasión.

Finalmente, la información médica incorporada a las actuaciones refiere el padecimiento por el actor de un traumatismo, perforación o estallido del ojo izquierdo (documentos 2 y de la reclamación), traumatismo que menciona, particularmente, el informe forense emitido en las actuaciones penales seguidas con ocasión de los mismos hechos que ahora se tratan, aunque limitando sus determinaciones a la valoración del daño sufrido y señalando, precisamente, que, según refirió el propio actor, dicho traumatismo tuvo lugar por el impacto de un objeto que aquel no llegó a ver.

En definitiva, según todo lo anterior y como afirma la resolución recurrida, no es posible descartar la intervención en el evento dañoso de material antidisturbios procedente del Cuerpo autonómico o de otro materia y origen ni, por lo tanto, puede llegar a saberse con certeza si el utilizado procedía de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

#### **QU INTO.-** Sobre la antijuridicidad del daño

El mismo resultado, sin duda con mayor contundencia, se obtiene del examen del requisito de la antijuridicidad del daño producido, y ello, sobre todo, bajo la concreta perspectiva que ofrecen tres de las circunstancias presentes en los hechos acaecidos.

La primera de ellas tiene que ver con la entidad de los altercados en los que intervinieron las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la que puede tomarse conocimiento con la lectura del mencionado informe de 11 de mayo de 2021, del Jefe Superior de Policía de Cataluña, según el cual el 18 de octubre de 2019 tuvo lugar una huelga general con motivo de la publicación de cierta sentencia del Tribunal Supremo condenatoria de varios políticos relacionados en el referéndum ilegal de 2017, registrándose por tal motivo numerosos y graves incidentes desde las primeras horas de la tarde hasta la madrugada del día siguiente, localizándose la zona afectada en los alrededores de la sede la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, sita en la Vía Laietana, 43, extendiéndose a la "...plaza de Urquinaona y otras calles adyacentes, entre las que se encuentra la zona donde el Sr. Domingo refiere que fue herido..", en la confluencia de la ronda de Sant Pere con la Calle Pau Claris, que define, precisamente, una de las cuatro esquinas de la citada plaza, la más próxima a la que forma con la Vía Laietana.

Añade el informe que "...la gravedad de los incidentes dejó a más de 50 policías nacionales heridos, algunos de gravedad, y fue necesario el empleo de abundante material antidisturbios, incluidas las pelotas de caucho de 54 mm y forma esférica, para hacer frente a la violencia desatada contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el marco de una impecable actuación policial en la que se llevó al extremo la aplicación de los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad..".

En parecidos términos se expresaba la Comisaria Jefa de Coordinación y Planificación de la Unidad de Intervención Policial, en informe de 14 de septiembre de 2020, dirigido al Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona y acompañado a la demanda, mencionando también los graves incidentes de orden público que en ese día, entre las 18:00 y las 22:00 horas, afectaron a la vía Laietana y la plaza Urquinaona de Barcelona, incidentes que "...motivaron la participación de las Unidades de Intervención Policial (UIP), unidades de Policía Nacional Especializadas en el mantenimiento del orden público..", con mención asimismo de la "...extrema violencia.." de tales incidentes, "...con más de 50 policías heridos leves, 2 policías heridos gravemente y 1 de extrema gravedad..", haciéndose "...uso de material antidisturbios y entre ese material se procedió al lanzamiento de pelotas de caucho de 54 milímetros y forma completamente esférica..".

Por lo tanto, el empleo de los mencionados medios no puede considerarse incongruente, en cuanto adecuado lógicamente a la situación que se abordaba, resultando ser también oportuno y proporcionado a la intensidad de los hechos que se presentaban, que el informe de la Comisaria Jefa de la Unidad de Intervención Policial califica de demostrativos de "...extrema violencia.." y el de los Mossos d'Esquadra como de "...violencia contundente, con piedras de grandes dimensiones, pirotecnia lanzada contra los agentes, palos y diferentes

objetos de grandes dimensiones..", habiendo dejado cincuenta policías nacionales heridos, algunos de gravedad.

La conclusión expuesta tampoco se cuestiona por la ya mencionada pretendida prohibición por el Parlamento de Cataluña del uso de los mencionados medios antidisturbios, prohibición también invocada por la demanda en este sentido pero que, además de no constar que se extendiera a la actuación del Cuerpo Nacional de Policía, no incluía, como se ha dicho, su utilización en situaciones graves de ejercicio de la violencia, riesgo inminente para la integridad física o la vida de los ciudadanos y de los agentes de policía o importante destrucción de bienes, situaciones que no es posible descartar que se presentaran en el caso.

Finalmente, el presupuesto de la antijuridicidad del daño trata de justificarse en la demanda desde la perspectiva de la ubicación concreta del actor en el momento del incidente, que, según se afirma, se encontraba muy alejada de la de los altercados, sin que, por lo tanto, fuese razonable que le alcanzaran las medidas utilizadas por la Policía, argumento que, sin embargo, contrasta con la del propio recurrente sobre la procedencia del proyectil de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron en los acontecimientos. No puede sostenerse al mismo tiempo que el daño fue causado por la actividad desplegada por las Fuerzas estatales del orden, y que, sin más explicación, el recurrente se encontraba muy alejado del lugar en el que se produjeron los acontecimientos que motivaron la intervención policial.

Además, como se ha dicho, el actor sostiene que el impacto se produjo en la confluencia de la Ronda de Sant Pere con la calle Pau Clarís, es decir, como ya se ha dicho, en una de las esquinas de la Plaza Urquinaona, precisamente la más cercana a la que da inicio a la Vía Laietana, en el núcleo, pues, de los altercados producidos.

Sobre este particular extremo conviene destacar la afirmación en cierto lugar de la demanda sobre la producción del accidente en la confluencia de las calles Pau Claris y "...Diputació..", indicación que, sin embargo, contradice directamente el contenido de la reclamación formulada y el propio de la demanda en cuanto señalaban como tal la mencionada intersección de aquella calle con la Ronda de Sant Pere (hecho 1º y fundamento jurídico 2º.3). No es cierto, pues, que, como también asegura la demanda en aquel momento, el lugar en que se produjo el evento dañoso dictara un kilómetro de la Jefatura Superior de Policía, en la Vía Laietana, 43, distancia esa que, sin embargo, sí se aproxima a la que separa el citado órgano de la mencionada calle "...Diputació..".

En fin, todo lo dicho resta credibilidad a la afirmación del recurrente, coincidente en este punto con la de su pareja (obrante en las actuaciones administrativas), sobre el hecho de encontrarse en el lugar para regresar a su casa, sin haber participado en los acontecimientos, cuando, como se ha visto, el accidente se habría producido en la zona misma de los altercados, sin que conste que el domicilio de aquel se encontrara en las cercanías del lugar, sino bastante alejado (en el Camí de la Torre Sansalvador, según su Documento Nacional, o en la calle Ullastre, según el poder y los informes médicos aportados).

Como puede verse, tampoco se ha justificado en el caso la concurrencia del presupuesto de la antijuridicidad del daño causado, descartada razonablemente en el caso a la vista de la utilización congruente, ordenada y proporcionada de los medios por parte de las Fuerzas de seguridad y atendida también la presencia del recurrente en el lugar en el que dicha utilización se produjo, sin detectarse razón alguna que impida apreciar su participación en ellos.

#### **SE XTO.-** Conclusión de la Sala

En consecuencia, considerada la ausencia en el caso de dos de los presupuestos que descartan el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, sin necesidad de examinar el resto de las cuestiones planteadas, relacionado con la determinación de la indemnización reclamada, el recurso debe ser desestimado, y ello, de conformidad con lo establecido al respecto por la Ley Jurisdiccional (artículo 139.1), con la obligada condena del actor al pago de las costas causadas en esta instancia.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

#### **FA LLAMOS**

**PR IMERO.- Desestimar** el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Domingo frente a la resolución de 25 de enero de 2022 de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, actuando por delegación del Ministro, desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial.

**SE GUNDO.-** Condenar al recurrente al pago de las costas causadas en esa instancia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.



**Recursos:** La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su **notificación**; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta, así como la constitución del depósito de 50 euros, en caso preceptivo, en la cuenta del B. Santander 2605000000, con indicación del número de procedimiento y año.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ